

VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata, 2010.

Entre la insurgencia y la paz suicida. Reflexiones sobre un itinerario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Bozza, Juan Alberto.

Cita:

Bozza, Juan Alberto (2010). *Entre la insurgencia y la paz suicida. Reflexiones sobre un itinerario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-027/149>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eORb/onQ>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

ENTRE LA INSURGENCIA Y LA PAZ SUICIDA.

Reflexiones sobre un itinerario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Juan Alberto Bozza. Docente e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.

Albertobozza@speedy.com.ar

Introducción.

Los estudios sobre la radicalización política latinoamericana de los años sesenta abordaron cuestiones controversiales, como el origen y las potencialidades de la violencia insurgente. La experiencia en desarrollo de las FARC ofrece a los observadores un caso tan intrincado que todavía perturba al actual proceso político de América Latina. El profuso material de la crónica contemporánea, alimentada por las agencias periodísticas internacionales, la prensa del continente y por los pronunciamientos gubernamentales, ha establecido un sentido común – una vigorosa sentencia-, acerca de la irracionalidad y el carácter patológico de la violencia practicada por la organización. Su accionar es resumido como una insensata ordalía terrorista, enemiga de la población colombiana, de la democracia y única responsable de más de cuatro décadas de inestabilidad en la región. Los discursos públicos prevalecientes señalan, además, su incapacidad para formular proyectos políticos y su pertinaz negativa de avizorar cualquier tentativa de pacificación en Colombia. Probablemente, la orientación seguida por el grupo guerrillero en las dos últimas décadas favorezca ese tipo de percepciones y juicios descalificadores. Los secuestros y tomas indiscriminadas de rehenes, las ejecuciones, las denuncias de atentados con armas prohibidas por la Convención de Ginebra y las sospechadas vinculaciones con el narcotráfico han deslegitimado profundamente el proyecto originario y la metodología de las FARC, experimentando “tendencias degenerativas” en su organización y ensombreciendo su reputación en la opinión internacional¹.

¹ Las denuncias de los gobiernos colombianos y de Estados Unidos que imputan a las FARC actividades de narcotráfico siguen despertando controversias. Según la propia guerrilla y algunos analistas norteamericanos, las FARC solo están involucradas en el *cobro de impuestos* a los revendedores que compran las hojas a los campesinos. También sostienen que, como máximo, un 2,5% de todo el cultivo de coca en el país está indirectamente ligado a las FARC-EP. Scott Wilson, "Colombia's Rebel Zone: World Apart," 18 de octubre de 2003, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/wor Id/issues/colombiareport/> . Los estatutos de las FARC/EP y del ELN explícitamente se comprometen a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, en ocasiones realizaron actos violentos y crueles contra civiles que refutan aquel compromiso. A fines del año 1985, un grupo escindido de las FARC, el Frente Ricardo Franco, perpetró la matanza de más de 150 miembros de su organización, acusados de

Este trabajo es una reflexión esbozada a partir de una reconstrucción histórica. Pretende un análisis más complejo de las interacciones entre un actor político y las características del régimen social y político en el cual se desarrollaron sus estrategias y acciones. Interroga críticamente los dictámenes intempestivos que disuelven u opacan el entramado histórico en que las prácticas insurgentes se urdieron y cobraron sentido. Algunas preguntas requieren un esfuerzo de dilucidación. ¿Fueron las FARC las que engendraron la violencia política en Colombia? ¿Hay en los orígenes de la organización algunas claves para comprender ese incómodo legado proyectado hasta el presente? La violencia guerrillera, ¿impidió a la milicia comunista elaborar o acumular un proyecto de poder político para Colombia? ¿Siempre rechazaron las FARC los programas de pacificación de la vida política colombiana? O, dicho de otra manera: ¿nunca estuvo en su voluntad crear una fuerza política con fines electorales capaz de distender o remontar los parámetros militaristas que gobernaron la lucha social? Estos interrogantes acotan el perímetro de nuestra reflexión histórica. La misma parte del período en que se insinuaron los primeros conatos de la lucha guerrillera –a comienzos de los años cincuenta-, y concluye a comienzos de los noventa, cuando las FARC intentaron construir un proyecto político, legalista, llamado Unión Patriótica, *exterminado sistemáticamente* por fuerzas paramilitares amparadas y sostenidas por el régimen².

1. UNA GUERRILLA QUE VIENE DE LEJOS.

Tierra de violencias ancestrales.

Contrariando algunas creencias vigentes, la lucha guerrillera en Colombia no estuvo inicialmente relacionada con la influencia de la Revolución Cubana. Cuestiones estructurales de la sociedad colombiana engendraron y atizaron la conflictividad social y la violencia política. La profunda inequidad reinante en la tenencia de la tierra, la sistemática exclusión de la participación política y las virulentas represiones a grupos disidentes que cuestionaron la naturaleza oligárquica y excluyente del régimen político

haber sido infiltrados por el ejército y la policía. Se la conoció como la “masacre de Tacueyó”, en Cauca, en la Cordillera Central. Equipo Nizkor, *¿Terrorismo o rebelión?*, publicación electrónica, 2 de diciembre de 2002. EEUU, Canadá y la Unión Europea incluyeron a las FARC en la categoría de “*organizaciones terroristas*”. Tomo el señalamiento de las “*tendencias degenerativas*” de Eduardo Pizarro Leongómez, *Insurgencia sin revolución. La guerrilla colombiana en una perspectiva comparada*, Bogotá, Tercer Mundo Editores / Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1996, pp 9-12.

² Quedan fuera de este análisis las últimas derivaciones del conflicto y los vaivenes sufridos por el proyecto insurgente, en el marco de una profundización de la intervención de los Estados Unidos, a través del *Plan Colombia*, primero, y del *Plan Patriota*, en la era Bush/Uribe.

fueron condicionantes históricas de largo aliento en cuyo interior se inscribió la lucha armada³.

La cuestión agraria fue la dimensión más significativa del inconformismo social y de las violentas respuestas a aquellos reclamos por parte del aparato estatal y de las elites terratenientes cogobernantes. El estado de marginación estructural del campesinado y la dinámica de las guerras civiles entre conservadores y liberales fueron la raíz de los pesares de la población rural. No solo ocasionaron el despojo de sus tierras, sino que empujaron a los campesinos a colonizar otros territorios y recibir nuevas andanadas de la represión gubernamental y paraestatal. La resistencia campesina encontró un terreno fértil al articularse con la conflictividad política nacional. En el enfrentamiento armado bipartidario, los sectores rurales más oprimidos apoyaron a los liberales. En estas filas, una vertiente izquierdista liderada por Jorge Eliécer Gaitán, era receptiva de las demandas de reparto de tierras y de frenar la voracidad de los grandes hacendados sobre la pequeña propiedad. El fenómeno se perpetuaba bajo la dominación oligárquica ejercida por los gobiernos conservadores, representantes de las “grandes familias” de latifundistas⁴. Fue así que la violencia de clase, la expulsión y los desplazamientos territoriales fueron un caldo de cultivo para que varias comunas campesinas se *armaran como autodefensa* contra la impunidad de los hacendados, de sus esbirros y de las tropas gubernamentales. Algunos de estos grupos fueron liderados por liberales progresistas y por comunistas⁵.

El asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, intensificó los enfrentamientos sociales con masivas protestas urbanas, como *el Bogotazo*⁶. La guerra civil se extendió a pesar

³ Luís Eduardo Celis Méndez, “Construcción inconclusa de la nación colombiana”; reproducido por *ALAI (Agencia Latinoamericana de Información)*, América Latina en Movimiento, 22 de agosto de 2008.

⁴ La impronta de la concentración de la propiedad rural y la polarización de la riqueza perdura hasta nuestros días. Datos de la primera década del siglo XXI señalan que el 3% más rico de la población posee más del 70% de la tierra cultivable, el 57% subsiste con menos del 3% de esa tierra. El 1% más opulento de la sociedad se apropia del 45% de la riqueza, la mitad de la tierra agrícola es detenida por el 37% de los latifundistas. Garry M. Leech, *Killing Peace*, New York: Information Network of the Americas, 2002, p. 9; Ramsey Clark, "The Future of Latin America"; en *War In Colombia*, New York, International Action Center, 2003, pp. 23-47.

⁵ El Partido Comunista de Colombia se fundó en 1930. Aunque fue un grupo minoritario, tuvo un desarrollo en los años treinta entre las comunidades rurales más activas y resistentes. La principal comuna comunista fue la de Viotá, ubicada en Cundinamarca, en el sur central del país. Adolfo Gilly, “Guerrillas y repúblicas campesinas en Colombia”, *Monthly Review* (edición en castellano) n° 27, diciembre de 1965, p. 33.

⁶ El asesinato de Gaitán ocurrió cuando Bogotá era sede de la Conferencia Panamericana – cuna de la OEA-, la que se aprestaba a recomendar la implementación de medidas y leyes que proscibieran al comunismo. Existió la sospecha de que la CIA había urdido el crimen de Gaitán. Roa Sierra, el sicario que le disparó, fue capturado y linchado por la multitud enardecida. Recientemente, la hija de Gaitán señaló que documentos desclasificados por la CIA reconocen el crimen como propio. Vanessa Davies, “El asesinato de Gaitán”. *El Correo del Orinoco*, 28 de junio de 2010.

de los intentos de acuerdos entre conservadores y liberales, desencadenando un inflamable período que la memoria oficial y las efemérides escolares recuerdan como “La Violencia”. Según Eric Hobsbawm, esta etapa insumió ‘... *la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa), en la historia contemporánea del hemisferio occidental, probablemente con la sola excepción de algunos momentos álgidos de la Revolución Mexicana*’⁷.

La sublevación era una respuesta defensiva frente a la contraofensiva lanzada por los latifundistas para recuperar las tierras ocupadas por los campesinos en años anteriores. “La Violencia” fue certeramente definida como una coyuntura de “ajuste de cuentas del latifundio contra el campesino”, utilizando la coacción, el despojo y la impunidad que le brindaba el régimen político conservador; en fin, un *contrarreforma agraria* que restableció la concentración de tierras en manos de los grandes hacendados⁸.

En las regiones rurales del departamento de Tolima varias comunas campesinas se sublevaron en armas, entre ellas la de Marquetalia, convertida en experiencia de autogobierno comunista bajo los liderazgos históricos de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas⁹. Otras comunidades similares se organizaron en El Pato, Sumapaz, Río Chiquito y Guayaberos. Eran guerrillas de autodefensa campesina; no tenían un mando central unificado ni un plan estratégico para disputar el poder político por la lucha armada revolucionaria. Ninguna de ellas aceptó la orden de desarme emanada del poder, por lo que recibieron el estigma de “Repúblicas independientes” que atentaban contra la “soberanía nacional” del Estado Colombiano. Su población se engrosó con miles de familias campesinas que, perseguidas por hacendados y sicarios a su orden, encontraron asilo en tales comarcas. Hacia 1952, existían cerca de 40.000 guerrilleros liberales y de izquierda en estos asentamientos rurales¹⁰. Herederos de este movimiento caracterizaron

⁷ Eric Hobsbawm, *Rebeldes primitivos*, Barcelona, Ariel, 1974, cap. "La anatomía de La Violencia en Colombia".

⁸ Arturo Alape, *La paz, la violencia, testigos de excepción*, Bogotá, Planeta Colombiana editores, 1985, p. 68.

⁹ Manuel Marulanda Vélez fue el nombre adoptado por Pedro Antonio Marín, un antiguo militante liberal insurrecto, devenido comunista. Jacobo Arenas, nacido Luís Alberto Morantes, en Bucaramanga en 1924, fue un intelectual de PCC que, influido por el guevarismo, fundó junto a Marulanda las FARC. Fue el principal impulsor del proyecto político legalista Unión Patriótica en 1985. Jacobo Arenas, *Diario de la resistencia de Marquetalia.*, Ediciones Abejón Mono, 1972. Vernon L. Fluharty, *Dance of the Millions: Military Rule and the Social Revolution in Colombia: 1930-1956*, 1975. Mary Roldán, *Blood and Fire: La Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953*, Duke University Press, 2002.

la composición campesina y la naturaleza defensiva de las primeras milicias guerrilleras¹¹.

Con el advenimiento de la dictadura del general Rojas Pinilla, algunas poblaciones campesinas se desmovilizaron, aunque los sectores influidos por la izquierda y por liberales progresistas permanecieron en estado de insurgencia. Tampoco la proclamación del Frente Nacional, el acuerdo de conservadores y liberales firmado en 1957 para alternarse en el poder durante 16 años, pudo resolver la cuestión del desarme de dichas regiones. Desconfiando de las promesas gubernamentales, las comunas exigieron a las autoridades mayor presencia con programas sociales, construcción de escuelas y promoción de la salud antes del desarme¹². En condiciones de aislamiento, ante un inminente asedio gubernamental, comenzaron a experimentar cambios revolucionarios. Los núcleos de la guerrilla comunista devinieron grupos de autodefensas de masas; defendieron sus zonas de los ataques de bandoleros a las órdenes de latifundistas; impulsaron asentamientos campesinos, repartieron la tierra entre sus habitantes, organizaron mecanismos de trabajo colectivo y de auxilio a la pequeña propiedad individual; las asambleas de la población instituyeron prácticas judiciales y, para contener la represión del gobierno, trataron de extender las comunidades a otras áreas¹³. El tránsito abierto por las comarcas autogestionadas provocó el encono de las clases propietarias gobernantes. En octubre de 1961, uno de sus voceros más destacados, el senador conservador Gómez Hurtado, reclamó el fin de las “*repúblicas independientes*”, señal premonitrice de una intervención militar contra

¹⁰ Daniel Pereyra, *Del Moncada a Chiapas, Historia de la lucha armada en América Latina*, Los libros de la Catarata, segunda edición, 1994, España, p.62-63.

¹¹ “*La guerrilla comunista se asienta y se fortalece en zonas que tuvieron en los años treinta papel protagónico en la lucha por la recuperación de la tierra, ubicadas geográficamente en el sur de Tolima y Sumapaz en Cundinamarca. Entonces, por el azar de los acontecimientos, los antiguos líderes de las ligas campesinas se convierten de pronto en avanzados dirigentes guerrilleros. Era una guerrilla, la liberal y la comunista, en su conjunto, de rostro campesino, de objetivos esencialmente agrarios, con una visión militar recortada que no traspasaba los linderos o límites de sus zonas. Pero a pesar de sus dificultades, nunca fueron derrotadas militarmente*”. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Comisión internacional, *FARC-EP: Esbozo Histórico*, edición corregida y aumentada, 2005, c. 1, p. 22.

¹² Un contexto más complejo de las contradicciones sociales que agitaron al campesinado puede verse en: Gilhodes, Pierre, *Las luchas agrarias en Colombia*. Bogotá: Ediciones el Tigre de Papel, 1970; también en Archila, Mauricio, *Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia 1958-1990*. Bogotá, CINEP, ICANH, 2003.

¹³ *FARC - EP: Esbozo Histórico*; op. cit., p. 25. James J. Brittain, “Las FARC-EP en Colombia, una excepción revolucionaria en una era de expansión imperialista”, *Monthly Review*, N° 4, Volumen 57, Estados Unidos, septiembre de 2005, p. 19.

la región¹⁴. Se produjeron varias acciones del ejército sobre las poblaciones del sur de Tolima. Frente a tal ofensiva, Marquetalia fue la cita de varios grupos armados provenientes de Guayaberos, Natagaima, El Pato, Neiva que, coordinados por el Partido Comunista dieron nacimiento a la “*Primera conferencia guerrillera*”, episodio que las FARC reconocen como un antecedente inmediato de su constitución.

Las comunidades auto organizadas fueron consideradas una amenaza por parte de los latifundistas y por la estrategia geopolítica de las administraciones de Kennedy y Johnson. El asedio a Marquetalia se concretó el 27 de mayo de 1964, con una intervención imponente y desproporcionada. Miles de soldados, desembarcos aéreos, bombardeos con napalm a ranchos y humildes granjas y el establecimiento de un cerco a las comunidades enfrentaron a menos de una centena de guerrilleros y campesinos mal armados. Las operaciones tuvieron el asesoramiento norteamericano en el marco del proyecto *LASO* (Latin American Security Operation); apuntaron a los insurgentes ya plenamente identificados con el Partido Comunista de Colombia (PCC)¹⁵.

Colonizaciones revolucionarias y Plan Agrario guerrillero.

El núcleo resistente de Marquetalia, menos de 50 guerrilleros, emprendieron una ardua travesía para salvarse de la aniquilación. En esas circunstancias, una asamblea de insurgentes aprobó el llamado “programa agrario”, el primer documento formal de las *proto FARC*.

El programa fue proclamado el 20 de julio de 1964 en Marquetalia. Al comienzo, su radio de acción se limitó a las regiones controladas por la guerrilla. La ampliación de la

¹⁴ El legislador arengó: “Hay en este país una serie de Repúblicas Independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefasta, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes.... Hay la República independiente de Sumapaz. Hay la república independiente de Planadas, la de Riochiquito...”. James D Henderson, *La modernización en Colombia: los años de Laureano Gómez, 1889-1965*. Universidad de Antioquía, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Colombia- sede Medellín, 2006, p. 588. Más información sobre la coyuntura se halla en Gonzalo Sánchez and Peter Bakewell, *La Violencia in Colombia: New Research, New Questions. The Hispanic American Historical Review*, Vol. 65, No. 4, Nov., 1985, pp. 789-807.

¹⁵ Dieciséis mil soldados atacaron las posiciones de las milicias. Ernest Feder, *The Rape of the Peasantry*, New York: Anchor Books, 1971, p. 189. El sacerdote revolucionario Camilo Torres dejó asentada la magnitud del papel norteamericano en la invasión del ejército colombiano. Escribió: “Sabemos que la similitud del desembarco de los *marines* en Santo Domingo son los desembarcos del ejército colombiano, dirigidos por la misión militar norteamericana en las *repúblicas independientes*”. Camilo Torres Restrepo, *Liberazione o morte. Antologia degli scritti*, Feltrinelli, Milán 1968, p. 54. Existieron escasos registros internacionales condenando la acción represiva. Una excepción fue la carta de protesta contra el gobierno colombiano redactada por Jean P. Sartre, Simone de Beauvoir y Jean Duclos.

zona ocupada fue sometida a *colonizaciones*, estimuladas por las primeras *leyes de política agraria* sancionadas por la organización. El programa aspiraba a cambiar de raíz la estructura social rural colombiana. Establecía la confiscación de la propiedad latifundista nativa y de aquella en manos de compañías norteamericanas y la entrega, en forma gratuita, a los campesinos que quisieran trabajarla. Otorgaba los títulos de propiedad a toda una vasta categoría laboral subalterna de colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados y otras formas arcaicas de explotaciones¹⁶.

La guerrilla respetaba la propiedad de los campesinos ricos que trabajaban personalmente las tierras y, en algunos casos, la preservación, por razones sociales y económicas, de grandes explotaciones, aunque sometidas a la planificación de la comunidad. Se garantizaban precios remunerativos básicos y de sostén para los productos agropecuarios. Prometía a los campesinos apoyo técnico y de infraestructura, herramientas y animales de labor. Consideraba como unidad económica deseable a las parcelas no inferiores a 10 o 20 hectáreas, según la fertilidad y ubicación de los terrenos.

La administración revolucionaria proyectaba sistemas de créditos accesibles, suministro de semillas, asistencia técnica y maquinaria para campesinos individuales y para las cooperativas de producción que se fundaran. Postulaba proyectos de electrificación, irrigación, centros de experimentación agrotécnica, institutos de salud, escuelas y planes de vivienda campesina.

El programa sancionaba el respeto a las comunidades indígenas, devolviéndoles las tierras usurpadas por latifundistas y resguardaba sus formas de autogobierno – sus Cabildos-, su cultura, lengua y organización interna¹⁷.

La guerrilla aspiraba a convertir la tarea de la transformación agraria en un espacio de articulación con otras fuerzas políticas nacionales opositoras al régimen. En sintonía con las resoluciones del PCC, convocaba a un Frente Unido de obreros, campesinos y capas medias comprometidas con la destrucción del latifundio y del régimen oligárquico¹⁸.

¹⁶ “El programa agrario guerrillero”. En: FARC- EP, Comisión Internacional, *FARC- EP. Esbozo de su historia...* p. 151

¹⁷ El expolio de las tierras de las comunidades aborígenes fue otra fuente de conflictividad, especialmente en el Cauca, donde, en 1980, se creó un grupo de guerrilla indígena, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).

¹⁸ “El programa agrario...” pp. 152-153. El Frente Unido del Pueblo se presentó como alternativa política contra la “democracia restringida” del bipartidismo. Camilo Torres fue uno de sus principales impulsores atrayendo a sus filas a activistas del movimiento universitario. Orlando Villanueva. *Camilo. Acción y utopía*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1995, pp. 56-65.

La “operación Marquetalia” no pudo dismantelar la organización armada; luego de desplazarse junto a grupos familiares a través de la región montañosa, la milicia se arraigó en las tierras bajas de Orinoquia, bajo la Cordillera Oriental, en Meta y Caquetá. La región se transformó en un asentamiento de campesinos que habían huido de la violencia estatal, colonizando el sur selvático del país. Las guerrillas encontraron apoyo en las aldeas campesinas, que los recibieron como protectores de los ataques de las guardias de los terratenientes y de infinidad de bandoleros que asolaban el territorio.

De la supervivencia a la diseminación territorial.

En septiembre de 1964, en territorio de Cauca, con la fusión de varios contingentes armados, se crea el *Bloque Sur del Partido Comunista de Colombia*. En dicha conferencia se definieron los aprestos militares para una guerra de guerrillas, con la creación de pequeños focos rebeldes en perpetua movilidad. Ciro Trujillo, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas presidieron el inicial Estado Mayor Conjunto de la organización. La toma de la localidad de Inzá puede considerarse la primera gran operación¹⁹.

En la Segunda Conferencia, realizada en Sumapaz, en 1966, fue utilizado oficialmente el nombre FARC. El cónclave elaboró los estatutos de la milicia, un reglamento interno, reglas de comando, un plan militar de alcance nacional, un programa político que contemplaba la articulación con el movimiento de masas, un sistema de educación para los integrantes de la guerrilla y para las aldeas donde operaba, dispositivos de propaganda y cuestiones financieras.

La meta del proyecto político se encaminaba a “la toma del poder” en unión con la clase obrera y el pueblo trabajador. La proclama tenía fines propagandísticos. Enquistada en regiones bastante aislados, la milicia aún no tenía capacidad para construir organizaciones urbanas de masas que convirtieran en realidad al pronunciamiento. La política seguía siendo un factor accesorio de las prioridades y lógicas que fijaba la lucha en el monte. Fiel a esa tesitura, fueron lanzados varios frentes de operaciones guerrilleras: El Pato, la cordillera central, el centro de Tolima, Quindio y Caldas, estos últimos casi diezmados por el ejército colombiano.

¹⁹ Los atributos de gran organizador político de Arenas y las capacidades militares de Marulanda/Tirofijo se conjugaron eficientemente para el desarrollo de las FARC. El operativo, en el cual se apropiaron de víveres y subsistencia, tuvo un fuerte valor simbólico. Se realizó el 16 de septiembre de 1965, en el aniversario de la insurrección de los comuneros de 1781, y contaron con la colaboración de casi un centenar de indígenas. “Qué les queda a las FARC”, *Semana.Com*, edición digital, Bogotá, 30 de junio de 2010.

La Tercera Conferencia, realizada en 1968, tuvo el carácter de “reconstrucción”. Fundó la Escuela Nacional de Formación Ideológica para un estudio más profundo de las modalidades de luchas guerrilleras posibles; y realizó una fuerte autocrítica por los golpes recibidos por parte de la represión militar. Se crearon otros frentes guerrilleros. Luego de las derrotas sufridas, se percibió una recuperación de la actividad al comienzo de los setenta. Una de sus causas fue que dejaron de ser atacados por el ejército (es probable que las FFAA intuyeran que la guerrilla ya no existía). “Al menos dejaron de matarnos”, comentó Tirofijo en la Cuarta Conferencia de 1970, en El Pato (Caquetá). Otro factor favorable para la reconstitución de la organización fueron las “colonizaciones” llevadas a cabo por la guerrilla en zonas rurales en las que se convirtieron en autoridad y resguardo de la ley de las comunidades campesinas. En 1974, la Quinta Conferencia, ocurrida en Meta, decidió convertir al grupo guerrillero en un ejército revolucionario. Las políticas de colonizaciones afianzaron sus articulaciones con las comunidades; en algunas comarcas ya eran un estado dentro del Estado. Se crea un Secretariado Nacional, integrado por fundadores y sobrevivientes de Marquetalia. Tenían frentes guerrilleros instalados en Tolima, Caquetá y Meta y el proyecto de abrir otros²⁰. En esta época lograron incursionar en la Cordillera Central, el escenario de la dura derrota de 1967.

La Sexta Conferencia de las FARC, ocurrida en Meta en enero de 1978, exhibió el crecimiento de la organización; habían creado Estados Mayores en cada uno de los frentes, con mandos políticos y militares. En los veinte frentes operaban unos mil hombres armados. Su periódico, *Resistencia*, comenzó a salir en forma regular. Un recambio generacional produjo el licenciamiento de ciertos líderes históricos²¹.

2. LA GRAN APUESTA: LA CONSTRUCCIÓN POLITICA Y SUS RIESGOS.

Unión Patriótica: el nombre de la esperanza.

A la Séptima Conferencia, en mayo de 1982, concurrieron delegados de 27 frentes guerrilleros (3000 milicianos aproximadamente). Un salto cualitativo modificó lo que había sido una guerrilla a la defensiva *en una fuerza protagonista del conflicto social*. Esa percepción la llevó a constituirse en un *Ejército del Pueblo* (FARC-EP) y a elaborar

²⁰ Los frentes eran agrupamientos armados en un territorio fijo y estable, que reunía a unos 150 guerrilleros. La estructura estaba formada por núcleos móviles, llamados columnas, de cerca de 30 hombres, que incursionaban en acciones armadas y se replegaban. Solían dividirse en compañías.

²¹ Se jubilan algunos dirigentes que, envejecidos, ya no resistían el ritmo de combates y desplazamientos. El caso más conocido fue el de Isauro Llosa, el Capitán Lister, quien volvió a labrar una parcela en el anonimato

un Plan Estratégico, la *Campaña Bolivariana por una Nueva Colombia* (CBNC), nutriendo de nuevos milicianos enrolados, el ingreso a la Cordillera Oriental y el ataque a las posiciones gubernamentales en la misma Bogotá.

El plan de la CBNC marcó el crecimiento estratégico de la organización y los esbozos de un movimiento político con serias aspiraciones a discutir con el Estado un programa de cambios sociales y la pacificación. El mismo fue impulsado por el Partido Comunista, aceptando la oferta del presidente Belisario Betancur para una salida negociada de la larga beligerancia.

Las imágenes trágicas del actual recrudecimiento de la guerra han sepultado e invisibilizado aquella coyuntura en la que las FARC - EP demostraron un comportamiento político flexible y realizaron proposiciones pacificadoras; propuestas progresistas, como el establecimiento de controles democráticos sobre los aparatos represivos del Estado, contaminados con acciones extralegales, narcotráfico y grupos paramilitares. Como parte de ese proyecto, firmaron una tregua con el gobierno en mayo de 1984, los “Acuerdos de la Uribe”, sellados en Casa Verde²². El llamado dialoguista del presidente Betancur también se extendió a otros grupos guerrilleros como el Movimiento 19 de abril, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y Quintín Lame²³. Inspeccionados por una Comisión de Verificación, los acuerdos no implicaban el desarme de los insurrectos. El mismo sería gradual, a medida que se cumplieran las condiciones y garantías para el ingreso de las FARC a la política legal.

En las conversaciones, las FARC solicitaron la instrumentación de un conjunto de reformas democráticas para la distensión del conflicto; entre ellas la elección popular de alcaldes y gobernadores, descentralización administrativa y garantías para la actividad política de todos los movimientos. La guerrilla había alcanzado un objetivo relevante: asumían el status de fuerza beligerante, reconocida como interlocutora por el gobierno. Cumpliendo con lo acordado, lanzaron el partido Unión Patriótica (UP). La decisión

²² El campamento sede del Secretariado Nacional de las FARC, localizado en el departamento de Meta.

²³ El ELN fue fundado en Santander en 1965; había fusionado el guevarismo con la teología de la liberación, teniendo en sus filas a ex sacerdotes como Camilo Torres y Manuel Pérez Martínez. El EPL se creó en 1967 identificándose como guerrilla maoísta. El M-19 surgió en 1974 como un desprendimiento izquierdista de la juventud de la ANAPO (partido fundado por Rojas Pinilla) con estrategia de guerrilla urbana; se desmovilizó en 1990 para actuar como partido político (Alianza Democrática /M 19) y tener un papel destacado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Tras su disolución a mediados de los noventa, varios de sus integrantes se unieron al actual Polo Democrático Alternativo. Antonio Navarro Wolf, *el único de los comandantes del M 19 sobreviviente a los atentados*, fue elegido gobernador del Departamento de Nariño en 2008.

sembró promisorias expectativas de renovación política. Miles de personas participaron en la convocatoria del Frente: partidos, sectores internos de partidos, activistas sindicales y organizaciones de masas apoyaron la iniciativa. Aunque el PCC fue el principal impulsor de UP, también se sumaron destacadas personalidades de la cultura, profesionales, académicos y dirigentes de movimientos sociales y regionales. UP asumió su vida como partido legal, impulsando a varios miembros de la guerrilla a salir de la clandestinidad, entre ellos el comandante Iván Márquez²⁴.

La aparición de UP no debe confundirse con un mero artilugio ni con un apéndice digitado por la guerrilla. A ella convergieron militantes sociales y políticos deseosos de impulsar cambios progresistas, transformaciones radicales de las estructuras políticas tradicionales y del anacrónico régimen de concentración de la propiedad rural; también quienes se propusieron denunciar y enfrentar la viscosa expansión del narcotráfico en la financiación de los partidos tradicionales. UP propulsó una reforma constitucional moderna y democratizadora, finalmente sancionada en 1991, aunque sin la participación de las FARC.

Desde los primeros pasos, la coalición mostró signos de independencia (también de discrepancia) con respecto a las FARC. Varios dirigentes del PCC abandonaron la lucha guerrillera por la político-electoral “de superficie”. Jacobo Arenas, perfilado como futuro candidato presidencial de UP, fue reemplazado por el profesor Jaime Pardo Leal, un prestigioso abogado, juez y profesor universitario miembro del PCC. Dirigentes como Bernardo Jaramillo bregaron por ampliar la base de apoyo de UP, con total autonomía de las FARC, y vincularla con la Internacional Socialista. También criticó a la guerrilla por mantener su consigna de *"todas las formas de lucha"* cuando las adhesiones electorales de UP crecían significativamente²⁵.

El primer congreso de la UP, realizado en 1985, eligió una dirección nacional, trazó los lineamientos políticos y se preparó para la participación en las elecciones. En los comicios de 1986, obtuvo el tercer puesto con 320.000 votos y eligió 14 parlamentarios,

²⁴ Fue elegido congresista de UP por el Departamento de Caquetá, en 1986. Regresó al monte cuando todos sus compañeros de escaños fueron asesinados. Reemplazó a Raúl Reyes en la Secretaría Internacional de las FARC, luego de que aquel fuera muerto por un ataque del ejército colombiano en Ecuador, el 1 de marzo de 2008.

²⁵ Nacido en Manizales, Jaramillo era un dirigente comunista de origen agrario, convertido en candidato a presidente de UP, luego del asesinato de Pardo Leal. Había alcanzado un altísimo nivel de popularidad en los meses previos a las elecciones de 1990 y proponía ampliar la coalición con un acuerdo con Alianza Democrática - M 19, del ex guerrillero Carlos Pizarro. Jaramillo y Pizarro fueron asesinados en 1990 por paramilitares y sicarios del narcotráfico, las AUC de los hermanos Castaño. Investigaciones recientes vincularon a sus verdugos con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “Los magnicidios y el DAS”. En: *Semana.com*, Bogotá, 9 de enero de 2010.

17 diputados provinciales y más de 350 concejales municipales en todo el país. Teniendo en cuenta la brevedad de la campaña política y los escasos recursos económicos, UP valoró el resultado obtenido. La adhesión creció en la opinión pública y nuevos grupos se acercaron al proyecto. A fines de los ochenta, era una fuerza con chances de poder y Bernardo Jaramillo, su candidato *asesinado en la campaña electoral* de 1990, figuraba con buenas expectativas en las encuestas.

Una conjunción de intereses derechistas conspiró contra el reconocimiento de la guerrilla como actor político y contra el ingreso de una fuerza progresista a la escena electoral. El ejército, los grandes terratenientes y la mafia del narcotráfico participaron activamente en la brutal clausura de la experiencia político electoral de una fuerza guerrillera que comenzaba a discutir la alternativa de la desmovilización.

La aniquilación sistemática.

El crecimiento tentacular del narcotráfico, fenómeno denunciado recurrentemente por los candidatos de UP y por las FARC, se convirtió en un factor protagónico en el régimen político colombiano a partir de la década del ochenta²⁶. Las redes generadas alrededor de la producción y exportación de marihuana fueron el dispositivo a partir del cual se montó y expandió el tráfico y luego la producción de cocaína con los cárteles de Medellín y Cali²⁷. El crecimiento de este tipo de fortunas ligó los negocios del *capitalismo mafioso* con los circuitos de lavado de dinero y con la búsqueda de la impunidad. En el primer itinerario, se relacionaron con terratenientes, empresarios, industriales y banqueros (espacios elegidos por sus inversiones y negocios); en el segundo con representantes de la autoridad estatal, de sectores de las FFAA y de dirigentes de partidos políticos. Otras condiciones estructurales de la sociedad

²⁶ Las FARC proclamaron reiteradamente su posición contraria a la irradiación del narcotráfico en la sociedad colombiana, pero este pronunciamiento fue escasamente considerado por la corriente principal de los análisis sobre la guerrilla. *"Nosotros no tenemos relación ni mucho menos negocios con ningún cartel de drogas. Las FARC-EP rechazan el narcotráfico por principio y por ética. En materia financiera, continuaremos con nuestra política de cobrar el Impuesto para la Nueva Colombia a aquellas personas, naturales o jurídicas, enemigas de la democracia, cuyo patrimonio supere los mil millones de pesos, porque nuestra lucha es contra un Estado injusto, y contra los ricos que lo sustentan y lo usufructúan. Y si estos le dan dinero al Estado para que adelante la guerra contra el pueblo, también tienen que dárselo a este para que se defienda de la agresión. Lo demás es la desinformación"*. Manuel Marulanda Vélez, "Las FARC-EP: 30 años de lucha por la paz, democracia y soberanía"; en FARC EP, *Esbozo...* p. 96. En años recientes, los gobiernos de Colombia y de EEUU le han adjudicado a las FARC el término de "narcoguerrilla", en el marco del Plan Colombia primero y, luego, de la Iniciativa Regional Andina patrocinada por Bush. La evolución contemporánea de esta cuestión está fuera del radio inspección del presente artículo.

²⁷ Luís Eduardo Celis Méndez, "Construcción inconclusa de la nación colombiana", reproducido por ALAI (Agencia Latino Americana de Información). *América Latina en Movimiento*, 22 de agosto de 2008.

colombiana aceitaron la pista del narcotráfico. Un estado “débil” en el control del territorio, instituciones permeables a menesteres ilícitos, un campesinado empobrecido - que hizo del cultivo de la coca una actividad de subsistencia -, y los grupos armados que financiaron con sus caudales sus actividades permitieron la expansión de aquel negocio. Un proceso irreversible fusionó los intereses de la *narcoburguesía* con la clase latifundista²⁸, compartiendo la misma estrategia de defensa del orden y proveyendo un instrumento efectivo de combate contra la guerrilla: los grupos paramilitares. “*Son organizaciones –confesaba un funcionario del gobierno en 1988-, que empiezan a contar con la simpatía y el apoyo económico de los terratenientes más reaccionarios de cada región del país*”²⁹.

La reproducción del paramilitarismo y su secuela, de destrucción de UP, fue la principal causa de la frustración del proceso de pacificación y de la promesa de desmovilización por parte de la guerrilla. Bajo el eufemismo de “*autodefensas*”, civiles derechistas alentados por latifundistas, narcotraficantes y militares se comprometieron a destruir la guerrilla y a *la que estimaban era su base campesina simpatizante*³⁰.

Análisis históricos insospechados de condescendencia con la guerrilla desnudaron el vínculo (y en algunos casos el origen) de varios escuadrones con la cúpula del ejército, desde fines del gobierno de Turbay Ayala³¹. La entente expresaba el desacuerdo de los mandos castrenses con la política de paz anunciada por el candidato Belisario Betancur (1982-86). Las “autodefensas” siguieron practicando la guerra *que los acuerdos de paz le impedían hacer a las FFAA*. Paralela y sigilosamente, el ejército entrenó, apoyó y armó a los primeros *centuriones* que operaron en Puerto Boyacá, en el nororiente antioqueño y en la región del Ariari en el Meta. La consolidación de estos “*ejércitos*

²⁸ Mayolo, Carlos, “El Narcoagro”, *Semana*, Bogotá, No 1023, 29 de noviembre de 1988, p 17. La compra masiva de tierras por los narcotraficantes, a partir de los ochenta, y el nuevo latifundismo emergente han sido asimilados a una “contrarreforma agraria”. Ricardo Sánchez, *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto político, económico y social*, Bogota, Ariel-PNUD, 1997, pp. 310-315.

²⁹ Declaraciones del Ministro de Instrucción Criminal, Eduardo Lozano, reproducidas por *Semana* n° 341, 15 de noviembre de 1988. Terratenientes y narcos tenían razones profundas para aniquilar a la guerrilla. Las FARC cobraban un “impuesto revolucionario”, el “gramaje”, a los grandes productores de cocaína que operaban en su territorio, no a los campesinos plantadores de subsistencia. .

³⁰ Los paramilitares usaban la atroz metáfora de “*drenar el mar*” para aludir a las matanzas colectivas de campesinos que no denunciaban a la guerrilla. El procedimiento guarda perfecta similitud con el de los oficiales franceses que combatieron al FLN en Argelia, desde fines de los cincuenta.

³¹ Coronel Oscar Gamboa Arguello, *Desmovilización de los paramilitares: una tensión entre la criminalidad y las políticas de seguridad ciudadana*, Tesis de Maestría, Universidad del Salvador, Bs. As., Argentina y Colegio Interamericano de Defensa, Washington, EEUU, 24 de mayo de 2006, pp. 8-9. Turbay Ayala gobernó entre 1978 y 1982.

privados”, defensores de la gran propiedad, no dejó de ser alentada por los barones del narcotráfico, que ya habían adquirido grandes fincas con las divisas provenientes de sus transacciones ilícitas. Poderosos jefes del negocio de las drogas comenzaron a participar con hombres y recursos en una *alianza de seguridad privada* junto a terratenientes, empresarios y militares para aniquilar a las FARC y a sus organizaciones afines o frentes sociales. La expresión más diáfana (o turbia) de este connubio fue el gran empresario de la cocaína Gonzalo Rodríguez Gacha, tutor, en los años ochenta, de tres “ejércitos privados” en municipios de Boyacá y de Putumayo que combatieron a las FARC y aseguraron sus negocios ilícitos³². La ofensiva derechista multiplicó la creación de “autodefensas”, como las unificadas bajo el mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, quienes también apuntaron a la destrucción de los militantes de UP³³. La represión paramilitar a UP mostró la intransigencia de las elites propietarias (latifundistas tradicionales y narcotraficantes de nuevo cuño), refractarias al surgimiento y organización de un grupo político al que consideraron peligroso para sus actividades e intereses. La vinculación de la criminalidad política con la estrategia de sectores de las clases dominantes que rechazaban la brecha de renovación partidaria no pasó desapercibida para las organizaciones defensoras de los derechos humanos³⁴. Abierta a mediados de la década de 1980, esa corriente de renovación política alentó un proceso de descentralización que, por vez primera, habilitaba la elección popular de gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales. Hacendados y grandes productores, identificados con los liberales y conservadores, se opusieron a que las alcaldías escaparan a su dominación directa y atacaron virulentamente a los candidatos de UP que

³² Alejandro Reyes Posada, *Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia*, Editorial Norma, 2009, “Introducción”. Sobrevivientes de UP sindicaron a Rodríguez Gacha, alias El Mejicano, como instigador del asesinato de Jaime Pardo Leal.

³³ Financiados por los ganaderos de la región de Córdoba, los hermanos Castaño crearon, a comienzos de los '80, las Autodefensas Campesinas Córdoba y Urabá (ACCU); núcleo base de la convergencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una década después. Fueron los autores de cuantiosas matanzas colectivas de campesinos, a los que se acusaba de simpatizar o no denunciar a las FARC. Las escuadras derechistas estuvieron genéticamente filiadas con el narcotráfico, actividad que le dio a Fidel y Carlos Castaño el pasaporte a la fortuna y a la tumba, ambas prematuras. En su libro, Castaño reveló su participación en los crímenes de la dirigencia de UP y en varias matanzas de campesinos, entre ellas la de Mampiripán (Meta), ocurrida a mediados de julio de 1997 con la cooperación del ejército, la policía, funcionarios de la ciudad y de asesores norteamericanos. Carlos Castaño (en colaboración con Mauricio Aranguren), *Mi confesión*, Bogotá, Norma, 2001, pp. 123/134.

³⁴ Desde su sede en Bogotá, el Defensor del Pueblo reconocía la existencia “*de una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos*”, “Informe del Defensor del Pueblo, 1992”. Citado por Corporación Reiniciar, *La Ley de ‘Justicia y Paz’ no es un instrumento para esclarecer el genocidio contra la Unión Patriótica*, Bogotá, 2006, p. 6.

impulsaban esas reformas. La oposición tradicionalista, envalentonada con fogosos sermones de la cúpula eclesiástica³⁵, se trocó en amenaza y violencia. La prensa conservadora preparó el ambiente sembrando pronósticos catastrofistas ante un posible triunfo de la izquierda. Según este clamor, la guerrilla y UP podían capturar muchas alcaldías y poner en *peligro los lazos de la unidad nacional*³⁶.

Tácticas de exterminio y factores de la impunidad.

Miles de activistas y seguidores UP y del PCC (su fuerza mayoritaria) fueron masacrados en las últimas décadas del siglo XX y en la primera del siguiente. La persecución demostró la continuidad de prácticas represivas extralegales añejas, como las perpetradas contra los comunistas desde fines de los cuarenta, cuando las elites gobernantes se identificaron con las tesis norteamericanas de la guerra fría³⁷. El partido fue proscrito en diversas etapas; en la década posterior al crimen de Gaitán y en 1967. Durante esos años padeció asesinatos y “desapariciones” de sus integrantes. Sus órganos de prensa y locales partidarios sufrieron censura y destrucción. Los crímenes también alcanzaron a los activistas que participaron en alianzas con el PCC, como la Unión Nacional Opositora (UNO), en 1975, y el Frente Democrático, en 1980³⁸. Estos antecedentes fueron un legado ominoso latente en la escena política en la que se fundó UP. El reformismo social – radical en el diagnóstico de la concentración de la propiedad-, que prometía la incipiente coalición de izquierdas alentó a grandes hacendados y al *narcoagro* a promover y financiar a los escuadrones paramilitares. Las tácticas represivas empleadas fueron tan diversas como atroces. En varias ocasiones el “escarmiento” fue propiciado por *olas de rumores* que recorrieron el país adelantando la existencia de planes de exterminio diseñados por

³⁵ En febrero de 1986, a poco de las elecciones locales, la 45ª asamblea de la Conferencia Episcopal, condenó a las coaliciones de izquierda. Iván Cepeda Castro, “Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia”, *Revista CETIL*, año 1, n° 2, septiembre de 2006, p. 107.

³⁶ Un diario conservador pronosticaba: “*Habrà de suponerse, por forzosa consecuencia, que desaparezcan los lazos de unidad con el gobierno nacional, que no opera, y el municipal, en que actuarán los dirigentes marxistas*”. *La República*, 19 de febrero de 1988, p.4.

³⁷ Las prácticas anticomunistas tuvieron, además, instigadores entre las organizaciones políticas clericales conservadoras, como la Acción Popular Colombiana. Medófilo Medina, *Historia del Partido Comunista de Colombia*, Tomo I, Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Bogotá, 1980, p. 326.

³⁸ *Voz Proletaria* fue censurado a comienzos de los setenta, durante la presidencia de Misael Pastrana. Su redacción fue destruida en 1978 por un atentado dinamitero. En ocasiones, el periódico fue sustraído y quemado en la vía pública por agentes policiales y del ejército. Varios colaboradores fueron asesinados, entre ellos su director Manuel Cepeda Vargas. NCOS, “Tras los Pasos Perdidos de la Guerra Sucia: Paramilitarismo y Acciones Encubiertas en Colombia”. Ediciones NCOS. Bruselas, 1995. Pág. 89.

fuerzas militares para destruir a los líderes y a los apoyos de la coalición en las regiones en las que habían triunfado en los comicios³⁹.

Numerosos atentados fueron ejecutados contra candidatos de UP durante la campaña electoral y en los primeros días de la asunción de sus cargos. En efecto, a partir de los comicios de 1986, la criminalidad política asoló los municipios y localidades donde UP había ganado las elecciones y comenzaba a encaminar programas de fuerte inclusión social, con la edificación de escuelas, hospitales y obras públicas. Bajo esta modalidad, la represión paramilitar se cebó con el municipio de El Castillo (Meta), donde fueron derrocados y asesinados cuatro alcaldes en forma consecutiva, además de varios funcionarios y campesinos partidarios de UP⁴⁰.

Otras modalidades fueron las incursiones que desataban el terror colectivo para amedrentar a la comunidad. Los grupos paramilitares, gozando de impunidad, irrumpían en las localidades donde UP tenía fuerte inserción social provocando brutales crímenes colectivos contra militantes y campesinos ligados a la coalición. Una muestra de esta táctica fue el asesinato de cuarenta militantes de UP, ejecutados en la plaza central de Segovia, Antioquia, el 11 de noviembre de 1988. Este macabro evento sintetizó, en un segmento menor a las dos horas, los elementos característicos del proceso de exterminio de UP.

Los hechos ocurrieron en una ciudad de 20 mil habitantes, gobernada por una alcaldesa de UP y con un Concejo Municipal con mayoría de dicha fuerza⁴¹. Durante la noche, sicarios armados a bordo de vehículos todo terreno ametrallaron a una población desprevenida. Sin desplegar consignas que los identificaran, recorrieron las calles disparando y tirando granadas sin un objetivo preciso. La brutal punición no fue repelida por los integrantes del puesto policial, que se mantuvieron en posición displicente. En poco más de una hora, dejó un tendal de 40 muertos y más de un centenar de heridos. El tremendo suceso desnudó otra práctica característica de la atmósfera de impunidad que abrigó a los perpetradores. Como los crímenes ocurrieron

³⁹ Por ejemplo el *Plan Esmeralda* amenazaba destruir a UP y al PCC en Meta y Caquetá, dos bastiones electorales. Otras amenazas similares se denominaron Operación Cóndor y Plan Baile Rojo. Jahel Quiroga Carrillo, “La Unión Patriótica: el exterminio de una esperanza”, citado por Iván Cepeda Castro, “Genocidio...” p. 106.

⁴⁰ “Vida y muerte...*op. cit.* “Condenan a la Nación”. En: *El Espectador.com*, 9 de marzo de 2009.

⁴¹ Segovia era el municipio más importante en la producción de oro. Durante mucho tiempo, la actividad estaba en manos de una compañía norteamericana que sometía a los trabajadores a un trabajo inhumano, desprotegido, además, del mínimo interés las autoridades estatales. En virtud de esa explotación, la izquierda legal y la armada tenían una importante base social en la región. Al abrirse el proceso de negociación con la guerrilla, la mayor parte de la población apoyó a los candidatos de UP. “Masacre de Segovia (Antioquia, noviembre de 1988)”. En: *Semana* n° 341, 15 de noviembre de 1988, pp. 8-9.

en una región influida por las FARC y el ELN, las autoridades, a través del comandante de la XIV Brigada, culparon de los sucesos a la guerrilla. La temeraria afirmación fue realizada a despecho de que todos los muertos eran civiles y de que no había existido combate alguno. La mendacidad fue refutada por el trágico peso de los hechos. Las pruebas revelaron una operación de “escarmiento” de los paramilitares contra la comunidad que había apoyado a los candidatos de UP, en la que participaron Alonso Baquero Agudelo (El Negro Vladimir) y Fidel Castaño. Las sospechas sobre el apoyo de las fuerzas del orden a los sicarios ganaron terreno. La policía y el Batallón Bombona, que no recibieron el fuego de los atacantes, dejaron “una zona despejada” para que los criminales actuaran⁴².

Los crímenes contra adherentes a UP incluían a figuras de fuerte compromiso comunitario en regiones donde existían conflictos laborales y otros engendrados por la fuerte concentración de la tierra. Las víctimas frecuentemente eran miembros de sindicatos, de asociaciones cívicas, cooperativistas, educadores, etc.

La metodología empleada contra los líderes nacionales más destacados, como los candidatos presidenciales y legisladores, fue el atentado personal a través de operaciones encubiertas con la utilización de sicarios juveniles, con acciones conjuntas de unidades de inteligencia del ejército y paramilitares o con iniciativas de escuadrones de la muerte. Esos procedimientos se usaron en los asesinatos de los candidatos presidenciales de UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocurridos en 1987 y 1990 respectivamente. En total, ocho congresistas fueron eliminados en atentados en sus casas.

UP denunció reiteradamente la impunidad y tolerancia estatal con el exterminio. En 1993, la conducción partidaria alertó al presidente Gaviria sobre un nuevo plan de destrucción elaborado por los mandos castrenses, la “*Operación Golpe de Gracia*”, pero la denuncia fue desestimada por el gobierno⁴³. El 9 de agosto de 1994, un comando

⁴² Castaño era la encarnación del anticomunismo. Su padre había muerto de un ataque cardíaco cuando, al parecer, estaba cautivo de las FARC. Estaba complicado en el narcotráfico, asociado con Rodríguez Gacha (El mexicano), jefe del Cartel de Medellín. Fundó uno de los primeros grupos paramilitares, integrando a ellos a trabajadores de sus fincas y entrenándolos en lucha contra guerrillera. Era conocido en la región por ofrecer a grandes propietarios, a cambio de dinero, servicios de seguridad contra las guerrillas. Su fama y violencia implacable crecieron al conocerse su participación en varias matanzas de campesinos en grandes fincas en Urabá. Su grupo había atemorizado tiempo atrás al pueblo, adelantando una masacre a través de volantes firmados por MRN (Muerte a Revolucionarios del Nordeste). “Masacre de Segovia...” op. cit. Sobre la confesión de Baquero Agudelo, véase *Semana.com*, 8 de septiembre de 2008.

⁴³ El senador Manuel Cepeda afirmó en la sala en octubre de 1993: “Hace pocos días la dirección del PC denunció al señor Ministro de Defensa la existencia de un plan denominado ‘Operación golpe de gracia’,

integrado por suboficiales del Ejército y paramilitares asesinó a Manuel Cepeda Vargas. UP vio extinguirse al último de sus representantes en el Congreso de la República. Se calcula que el exterminio de miembros de UP alcanzó a más de 5000 personas, además de provocar el desplazamiento forzoso de campesinos y la pérdida de sus tierras, con el objeto de destruir la base social de la fuerza izquierdista. La impunidad todavía rige sobre la abrumadora mayoría de casos⁴⁴.

El exterminio político de UP alcanzó la magnitud de un genocidio debido a la existencia de mecanismos de tolerancia, participación e impunidad estatal. Entre sus características más singulares se destaca que fue realizada bajo un régimen de democracia representativa⁴⁵. Tuvo como propósito terminar con un grupo político y desterrar de la vida pública a sus simpatizantes sobrevivientes y a las bases sociales que resistieron la práctica de ese tipo de violencia. Efectivamente, la práctica sistemática de la violencia redujo drásticamente a esa fuerza política, como pudo apreciarse por la abrupta declinación de su cosecha electoral luego de la sangría sufrida⁴⁶. Fue esa peculiaridad la que impulsó a los familiares de las víctimas a solicitar ante instituciones jurídicas internacionales que el proceso sea tipificado como un *genocidio por razones políticas*⁴⁷. Otro rasgo notorio de la luctuosa empresa fue que la persecución y destrucción se llevó a cabo en un prolongado período de dos décadas, abarcando a seis presidentes de diferente coloratura partidaria y provocando graves consecuencias en los patrones de la convivencia social en el país⁴⁸.

urdido por los altos mandos militares para eliminar la dirigencia comunista o empapelarla mediante juicios amañados. El Ministro manifestó su total incredulidad ante tales afirmaciones, hoy corroboradas escandalosamente por las incitaciones provocadoras del Comandante de las Fuerzas Militares”. Declaraciones reproducidas en Iván Cepeda Vargas, “Genocidio...op. cit.”, p 108.

⁴⁴ Carlos Guillén Lozano, “Prólogo”. En: Luis Alberto Matta Aldana, *Poder capitalista y violencia política en Colombia. Terrorismo de Estado y Genocidio contra la Unión Patriótica*, Bogotá, Ideas y Soluciones Gráficas, 2002.

⁴⁵ Según Eric Sotas, director de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT): “El crimen contra la UP es algo bastante especial en el mundo porque en Colombia, al mismo tiempo que se han mantenido las instituciones democráticas, se ha tratado de aniquilar un grupo político entero” Yezid Campos Zornosa, *Memoria de los silenciados. El baile rojo*, Editorial Ceicos, Bogotá, 2003, p. 14.

⁴⁶ En 2002, después de sufrir el intenso exterminio, la UP obtuvo menos de 50.000 votos. Iván Cepeda Castro, “Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia”. En: *Revista Cetil*, Bogotá, Año I, No. 2, septiembre de 2006, p. 105.

⁴⁷ Si bien hay razones evidentes de la perpetración de un genocidio con móviles ideológicos, el derecho internacional no incluye como víctimas a los grupos políticos en la definición del crimen de genocidio. En 1948, la *Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio* solo tipificó ese delito para grupos étnicos, raciales, nacionales y religiosos.

⁴⁸ Iván Cepeda Castro, “Genocidio político: el caso...” op. cit., pp. 101-102..

La impunidad que cobijó a los crímenes creció al calor de ciertos procedimientos de las autoridades estatales. Por ejemplo, el sistema legal se habituó a utilizar dispositivos ilegales apañadores del ejercicio de la violencia política selectiva. Bajo la forma de estados de excepción o medidas de seguridad se concedieron potestades de policía judicial a las fuerzas armadas que permitieron la aplicación de métodos de guerra sucia, como la organización de grupos paramilitares; las operaciones encubiertas de miembros del ejército o la práctica de la “guerra psicológica”⁴⁹.

La *invisibilidad* de la participación gubernamental en la masacre fue favorecida por la manera confusa y distorsionada con que fueron explicados los acontecimientos por los medios de información dominantes e incluso por calificados analistas de las ciencias sociales. Según estas interpretaciones, lo acontecido con UP fue una desafortunada convergencia de “hechos inconexos”, como delitos vinculados con el narcotráfico o vindictas individuales por los atentados de la guerrilla⁵⁰. La proliferaron de otros discursos públicos, emitidos por gobernantes, jefes de las FFAA, políticos, dirigentes empresariales, jefes eclesiásticos, etc., operaron como otras tantas formas de justificación indirecta y banalización de la aniquilación de UP. Con un peso gravitante en la opinión pública, ese tipo de interpretaciones propendió a deslegitimar y crear un muro de refracción contra los reclamos y alertas levantados por las víctimas. No faltaron ocasiones en que las denuncias sobre amenazas inminentes contra UP fueron malversadas y calificadas como ardid publicitarios, instalados por la izquierda para disimular su decadencia.

Como corolario del proceso, la impunidad fue cimentada por disposiciones administrativas del Estado Colombiano que terminaron consagrando “legalmente” el trágico desenlace sufrido por el grupo político. En septiembre de 2002, una resolución del Consejo Nacional Electoral le quitó la personería legal a UP, impidiendo su funcionamiento y entorpeciendo gravemente la posibilidad de acción pública a sus sobrevivientes⁵¹.

⁴⁹ “Vida y muerte de la Unión Patriótica colombiana”. En: *Le Monde Diplomatique*, edición Cono Sur, n° 71, mayo de 2005, pp. 12 a 14.

⁵⁰ El historiador de la Universidad Nacional de Colombia Marco Palacios es partidario de dichas interpretaciones. Sostiene que la agresión contra la UP fue el resultado de un “fuego cruzado” de las partes del conflicto armado colombiano. *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994*, Bogotá, Norma, 2006, p. 290. Para el historiador de la Universidad de Florida David Bushnell, los crímenes fueron una “vendetta de los narcotraficantes contra la UP”. *Colombia, una nación a pesar de sí misma*, Bogotá, Planeta, 1996, pp. 353, 361 y 362.

⁵¹ El Consejo utilizó el argumento de que, con 50000 votos obtenidos en las elecciones de 2002, UP no reunía los requisitos para su reconocimiento como fuerza política nacional.

Bajo fuego. Las FARC y el intrincado camino de la negociación.

Los líderes de las FARC expresaron cautela ante las promesas gubernamentales y los riesgos que acechaban al proselitismo de UP. Frente al aumento de los asesinatos, el Secretariado Nacional de la guerrilla le propuso a la dirección de UP la protección en sus campamentos, pero esta no aceptó el convite.

En el marco de esta encrucijada, donde “sapos” y sicarios practicaban una cacería irrestricta de militantes, las FARC decidieron el regreso al teatro de sus operaciones rurales. Si bien es cierto que la guerrilla nunca se “desmovilizó”, no parece exagerado comprender la decisión como un acto de supervivencia. La prensa hegemónica y las fuerzas gubernamentales eludieron un análisis profundo de las circunstancias en que las FARC tomaron esta decisión y la homologaron, expeditivamente, como una muestra más de insinceridad o duplicidad de la organización.

Otras conductas de la guerrilla también tuvieron poca visibilidad en los registros e interpretaciones oficiales. Aún bajo la atmósfera del fuego cruzado, sus líderes no rompieron el acuerdo de negociación en forma inmediata; incluso dieron un plazo para que el nuevo presidente, Virgilio Barco (1986-1990), cumpliera con los actos de distensión. En este explosivo entramado, Manuel Marulanda promovió el consenso de todas las fuerzas guerrilleras para mantener una solución política del conflicto. Con ese fin, en 1987, las FARC, el M 19, ELN, EPL, Quintín Lame y el PRT conformaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). El cónclave insurgente patrocinó una alternativa dinamizadora de la vida política: el camino de la pacificación debía conducir a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, cuando las FARC no habían abandonado la tregua, el nuevo gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) decretó, el 9 de diciembre de 1990, el ataque y bombardeo a Casa Verde, la sede del Secretariado Nacional de los insurgentes. Las FARC consideraron la acción del presidente como una “traición” y reanudaron las operaciones militares con el propósito de volver a sentar al gobierno en la mesa de negociaciones⁵².

⁵² Las FARC culparon al presidente por el colapso de la negociación: “El presidente Cesar Gaviria (1990-1994) nos atacó en Casa Verde, sin antes habernos declarado la guerra, agotando las posibilidades de encontrar una salida política antes de la guerra, al tiempo que expertos en política, habían dicho que las condiciones para realizar conversaciones de alto nivel estaban dadas, para desempantanar la situación que se nos estaba presentando en varias partes con los operativos y el incumplimiento de los anteriores gobiernos”. Manuel Marulanda Vélez, “27 de mayor de 1994. 30 años de las FARC EP”, en: *FARC- EP. Esbozo...* Capítulo 2, p. 76.

A lo largo de la década de 1990, los nuevos intentos de acuerdos no lograron desactivar la guerra civil. Las negociaciones de la CGSB y el gobierno fueron llevadas a Caracas el 15 de mayo 1991; luego fueron trasladadas a Tlaxcala, Méjico, el 10 de marzo de 1992, se reiniciaron durante la presidencia de Pastrana, en 1999, en San Vicente de Caguán (Caquetá), pero culminaron abruptamente en 2002. La ruptura hizo posible que las Fuerzas Armadas retomaron el control de la zona desmilitarizada o "zona de despeje", una comarca con la superficie de Suiza, situada al sur del país, que a pedido de la guerrilla había sido evacuada por el ejército⁵³.

Expansión de las FARC en los Municipios en el período estudiado⁵⁴.

Año	Municipios	Porcentaje de municipios
1964	4	0,04
1970	54	0,50
1979	100	9,00
1985	173	15,00
1991	437	41,00

Conclusión.

El análisis del pasado nos permite observar el exterminio de UP como una práctica enraizada en el comportamiento de los sectores dominantes y los gobiernos colombianos para excluir y reprimir a las fuerzas liberales reformistas, progresistas y de izquierda. La violencia política fue acunada y “naturalizada” en el terreno de los fuertes antagonismos sociales entre una masa de campesinos despojados y las elites latifundistas. Marginalidad, ocupación de tierras por los campesinos y virulentos desalojos apañados por los sucesivos gobiernos, alimentaron el caldero de inextinguibles enfrentamiento de clases. Desde mediados del siglo XX, este proceso ya se expresaba con todos los ingredientes de la acción directa: magnicidios, expediciones punitivas de sicarios, autodefensas armadas campesinas liberales y comunistas,

⁵³ Amnistía Internacional. Colombia. San Vicente de Caguán tras la ruptura de las conversaciones de paz: una comunidad abandonada, Octubre de 2002.

⁵⁴ James Brittain, “FARC-EP...” op. cit., p 23.

invasiones del ejército colombiano y desplazamientos crónicos de campesinos. La drástica expedición militar contra Marquetalia (y las comarcas vecinas), a mediados de 1964, ensamblada en la estrategia de contrainsurgencia propiciada por el gobierno de Estados Unidos, transformó a las tradicionales autodefensas campesinas en una fuerza guerrillera organizada: el Bloque Sur primero, luego devenido FARC. Su programa de distribución de la tierra y su reclutamiento *mayoritariamente campesino* canalizaron las demandas de un campesinado oprimido por grandes hacendados concentradores de la propiedad. Esa conjunción permite comprender el carácter estructural de ciertos comportamientos campesinos y la complejidad del fenómeno social y político que nutrió a la guerrilla. Las zonas controladas por las FARC se transformaron en “santuarios” de sucesivas oleadas de campesinos desplazados que impulsaron nuevas colonizaciones de tierras en la región selvática de Colombia (una migración que todavía continúa). No resulta exagerado afirmar que en esos distritos, las FARC actuaron como “un estado”, una forma de poder reconocida por la comunidad rural sobre la cual “legislaba”, estableciendo, además, mecanismos cuasi formales de “tributación” sobre los grandes hacendados.

Desde fines de los años 70, la guerrilla consolidó su arraigo en diversos departamentos del país, a los que aglutinó en bloques, zonas donde operaban varios frentes permanentes de combate. Ese progreso territorial instó a las FARC a transformarse en “Ejército Popular”, una fuerza que desplegó *acciones ofensivas* contra las fuerzas del orden y comenzó a discutir con las autoridades gubernamentales el control de diversas regiones del país. En esa trayectoria de crecimiento construyó, quizás, la estrategia política más importante de su historia, el lanzamiento de Unión Patriótica. La novel formación fue una convergencia de la voluntad política de las FARC y de aspiraciones autónomas y críticas de la sociedad civil, contra el inmovilismo y la corrupción (esta última, inoculada por el narcotráfico hasta los entresijos de la financiación y administración del poder) del régimen bipartidista. UP abrió una coyuntura inédita en el derrotero de la guerrilla, la posibilidad de consensuar con otros actores sociales y políticos, y con el gobierno, un horizonte de renovación del régimen, que *podía conllevar la desmovilización de sus fuerzas*. La iniciativa sembraba perspectivas promisorias, aunque también removía riesgos inminentes, entre ellos el rechazo de la poderosa derecha vernácula y de la insidiosa geopolítica de la “segunda guerra fría” de las administraciones de Reagan y Bush. Esta reacción pasó a los hechos instrumentando

un proyecto de aniquilación sistemática e irrestricta de UP y de su entorno de simpatizantes. En sus fines más inmediatos, las masacres fueron una respuesta para impedir una salida negociada del prolongado conflicto armado en Colombia. Los mandos castrenses y grupos paramilitares (varios compuestos por sicarios del narcotráfico) fueron la principal herramienta utilizada contra los progresos de la izquierda en el sistema político y contra los avances de ciertos dispositivos de democratización y descentralización del régimen, insinuados con la aparición de UP. La apuesta de las FARC a construir una fuerza política legal fue diezmada con el concurso de la impunidad y complicidad de diversos gobiernos que sucedieron a Betancur. La brecha democrática abierta tímidamente a mediados de los años 80 fue sangrientamente anegada por una violencia revanchista que exhibió la anatomía del genocidio político.

La minuciosa destrucción de una fuerza política legal, creada para contribuir a la distensión del conflicto armado, parecía confirmar fatalmente las viejas convicciones que dieron origen a la guerrilla y que la impulsaron a recurrir a la lucha armada. El régimen colombiano, conservando la trama institucional de una democracia representativa, toleró la exclusión brutal de un proyecto de transformaciones socioeconómicas progresistas y de reformismo político democratizador y descentralizador, aun cuando quienes las propulsaban se ciñeran a las reglas y normas de la legalidad constitucional. Una mirada no necesariamente teñida de faccionalismo podía observar, con nutrida evidencia a su alcance, que la vía de acción democrática para impulsar transformaciones estructurales y su corolario, el desarme, conducían al cadalso. Bajo el fuego impune de los sicarios, la añeja caracterización que dio nacimiento a las FARC no resultaba fácil de refutar.

